



Por Iván García

El camión General Motors con carrocería estadounidense de los años 50 y un potente motor italiano Iveco de seis cilindros en línea, parquea frente a una casa en un barrio al oeste de La Habana. Varios hombres comienzan a descargar planchas de pladúr, bolsas de pasta para juntas y vigas de acero galvanizado.

Dos veces a la semana, Jesús compra una buena cantidad de materia prima para su negocio de montar estructuras ligeras que ahora mismo están de moda en Cuba. Él dirige tres brigadas que arman repisas, closets y techos a relieve en restaurantes y hospedajes privados. Entre su clientela se incluyen cientos de personas que construyen o remozan sus casas con esfuerzo propio.

A pesar que un closet grande de varias divisiones puede costar el equivalente a 900 dólares, quince veces el salario de un especialista médico, Jesús afirma que “la demanda supera por mucho la oferta”.

Y confiesa que tiene planes de expandir el negocio. “El gran problema es la materia prima. Al no venderse en las tiendas por divisas, tienes que comprarla por la izquierda. Los materiales salen de obras del Estado, lo mismo de un hotel de lujo en construcción que un hospital en reparaciones. El gobierno quiere poner orden, algo que la mayoría de los cuentapropistas estamos de acuerdo, pero no quiere abrir mercados mayoristas donde a precios justos se oferte lo que necesitamos y tampoco dejan importar. En Miami, que está más cerca de La Habana que Santa Clara, se pudiera comprar todo lo que necesitamos. Era más factible que el Estado le hubiera otorgado permiso a las operaciones de ferry que a las de cruceros. ¿Te imaginas cuántas cosas que se necesitan para los negocios y la gente común llegarían en esos barcos?”.

En opinión de Nicolás, economista, cuando en la primavera de 2010 el general Raúl Castro inició su tímida reforma económica y amplió la autonomía a los cuentapropistas, “lo hizo pensando en el millón y medio de personas que estaba previsto dejar cesantes después de recortes en el sector público, necesarios para aligerar el aparato burocrático. Pero por consideraciones de carácter político, se paró la ola de despidos y solo medio millón de trabajadores quedaron sin empleo. Los particulares siempre han sido un punto problemático para el gobierno. Los acepta, pero no los quiere”, señala y agrega:

“El trabajo por cuenta propia nació con un montón de trabas legales e impedimentos, como expandirse y acumular capital. Además de no tener un mercado mayorista y no poder exportar, no cuentan con un marco jurídico transparente. Están reconocidos en la futura Constitución, pero las reglas de juego quedan a merced de los caprichos y vaivenes de las autoridades. Esas políticas imprecisas han generado distorsiones en los negocios privados,

desde doble contabilidad, subdeclaraciones de impuestos hasta la adquisición de materia prima en el mercado negro. Si se quiere poner orden, el Estado debe ampliar el espacio, crear mercados mayoristas o autorizar la importación de insumos. Si algo el gobierno debe tener claro, es que los emprendedores privados no van a renunciar a sus negocios, a pesar de las constantes trabas. Si no se les permite hacerlo de manera legal, lo harán, como siempre sucede en Cuba, por debajo de la mesa”.

Alberto, dueño de una cafetería que vende comida criolla, explica que “es un dolor de cabeza confeccionar el menú del día, porque fundamentalmente, se elabora a base de carne de cerdo y pollo. Pero como el Estado es incapaz de satisfacer la demanda, los precios de las carnes, viandas, hortalizas y frutas aumentan periódicamente. La carne de puerco deshuesada cuesta entre 55 y 60 pesos la libra. Una caja de cerveza, los gerentes de cafeterías y restaurantes estatales, te la venden a 27 y 28 pesos convertibles, le ganan tres o cuatro cuc a cada caja. Eso ha traído como consecuencia que no haya cerveza ni malta de producción nacional en toda La Habana”.

Para el viernes 7 de diciembre se han anunciado nuevas medidas para el sector privado. “Ya la ONAT (Oficina Nacional de la Administración Tributaria, organismo que rige el trabajo particular) de mi municipio se reunió con los dueños de negocios. Todo fue muela y mentira. Si quieren que el trabajo por cuenta propia funcione dentro de un marco legal, deben crear primero los cimientos”, expresa Alberto.

Pregúntele a cualquier emprendedor privado en Cuba su opinión sobre las nuevas directrices que próximamente promulgará el régimen. La mayoría de las respuestas critican fuertemente las incoherencias de los gobernantes y señalan con el dedo al presidente designado Miguel Díaz-Canel.

Hablé con 16 dueños de negocios dedicados a la gastronomía, hospedaje, construcción y transporte, y doce de ellos manifestaron que las nuevas normativas del Estado es una cortina de humo para enmascarar las verdaderas intenciones: estrangular el trabajo privado a golpe de cuchilla fiscal y prohibiciones. Cuatro de los 16 propietarios dijeron que si el gobierno se lo pone difícil entregan sus licencias. “Luego veré cómo me busco la vida. Al gobierno le gusta tener al cubano con el pie metido en el cuerpo. Si la cosa se pone dura, emigro o monto un negocio clandestino. Pero no me voy a morir de hambre”, asegura Joan, dueño de una cafetería.

“Nos tienen miedo. Consideran que somos un ‘mal ejemplo’ para la sociedad, porque somos capaces de hacer dinero y prosperar a pesar del bloqueo de Estados Unidos y la escasez. Ese dinero que ganamos nos hace más independientes. No dependemos del Estado para mejorar la calidad de vida de nosotros, de nuestras familias y de la gente”, subraya Luisa, peluquera particular.

Camila renta habitaciones y no “acaba de entender las estupideces del gobierno. Díaz-Canel es una marioneta. Fíjate que en el tiempo que lleva gobernando no se ha reunido con los cuentapropistas. Lo suyo es más Estado y mayor control del gobierno, una política que no ha funcionado en 60 años ni funcionará en el futuro. A veces pienso que dentro del gobierno hay agentes de la CIA. ¿Por qué temen que los cubanos hagamos dinero?”.

Si alguien está particularmente descontento son los taxistas privados. Desde el pasado 8 de octubre, los transportistas habaneros comenzaron a regirse por nuevas normativas. Pero casi ninguno las ha aceptado y con ferocidad critican esas disposiciones.

Edel, taxista que frisa los cuarenta años, está convencido que el Estado quiere controlar el dinero de los particulares. “Tenemos que abrir una cuenta y declarar el 80 por ciento del dinero que invertimos y ganamos. Lo único que han conseguido es que de 14 mil boteros que había en La Habana, solo 5 mil o 6 mil estén trabajando. El 7 de diciembre un montón de taxistas me han dicho que no van a salir a trabajar ese día, van a hacer una huelga de brazos caídos”.

Con la intención de hacer valer sus derechos, un grupo de trabajadores privados crearon una asociación. Con ella pretenden poder protegerse contra lo que consideran arbitrariedades del Estado. “PEMEMCUB (Pequeños y Medianos Empresarios de Cuba) fue fundada con la finalidad de ser reconocida nacional e internacionalmente como una organización que defiende los derechos de los emprendedores cubanos” declaró Antonio Font Carreño, miembro de la directiva, en una entrevista reciente publicada.

Aunque el Ministerio de Justicia no les ha dado respuesta a sus gestiones y aún no han podido inscribir y legalizar PEMEMCUB, Jesús, propietario de un negocio de montar estructuras ligeras, está convencido de que “para enfrentar los embates y normativas injustas del gobierno debemos unirnos. Y no somos pocos: entre cooperativistas y particulares sumamos más de un millón de trabajadores. El 25% del sector laboral en Cuba”.

Su estrategia es gritar lo más alto posible para que el régimen los escuche. No tienen otra opción.